

Realidades y apariencias del Plan Mesa

El Estado ha optado por mantener la visión de que el mercado generará empleo, por lo que el gobierno se encargará únicamente de aplicar “políticas compensatorias para los más pobres”. Según estimaciones realizadas por el Cedla —a partir de las promesas del gobierno— se crearían apenas 300 puestos de trabajo al año para 32 mil instalaciones de gas domiciliario; 350 puestos para la transformación de 20 mil vehículos y 10 mil puestos para construcción de viviendas. A eso se sumarían los 30 mil puestos que ha generado el PLANE (Plan Nacional de Empleo de Emergencia) y que se reeditará en su tercera versión.

Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario*

Más allá del discurso expresado por el presidente Carlos Mesa, el 1 de febrero, un análisis minucioso del plan económico del gobierno, señala que las medidas adoptadas para enfrentar la crítica situación del país, no están a la altura de los desafíos que le planteó la población boliviana aquel 17 de octubre de 2003.

Una revisión a los pilares del plan gubernamental, dan cuenta de que persisten las políticas económicas fundamentadas en la excelencia del libre mercado, la exclusión del Estado de las actividades económicas y la neutralidad de sus políticas, la orientación exportadora y la virtuosidad de la apertura comercial, confiando la solución de los problemas sociales de pobreza y exclusión social a las fuerzas del mercado.

En este marco, se repite la inclinación por la estabilidad antes que por el crecimiento, dirigiéndose a resolver de manera preferente el desequilibrio fiscal y circunscribiendo las acciones en favor de la reactivación productiva a la reedición o continuación de medidas dispuestas antes por el gobierno de Sánchez de Lozada.

La asunción de esta orientación, revela una suerte de combinación entre el cálculo de los riesgos políticos que enfrenta el sistema y la necesidad de cumplir con los condicionamientos externos

(organismos financieros internacionales y gobiernos), que precisaban de señales claras sobre el sacrificio que el Gobierno estaba dispuesto a imponer a la población, antes de disponer cualquier apoyo financiero. Ello también se expresa en la abierta disposición del Presidente a continuar con la negociación de convenios de libre comercio (Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA y los Tratados de Libre Comercio, TLC's).

La mal llamada austeridad

Una de las exigencias de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial es la disciplina fiscal. Para cubrir ese hueco que llegó a 700 millones de dólares el 2003, Mesa anunció la reducción del gasto público y el cobro de nuevos impuestos.

El primer paquete de reducciones fue calificado de austeridad, pero la revisión detallada de sus cifras, hace ver que muchas o están equivocadas o son engañosas. Existen varios ejemplos de estos en las partidas de los “gastos reservados”, en los gastos de servicios personales y en los supuestos recortes a los salarios de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo. Esta es una muestra en el recorte de los gastos corrientes, que según el gobierno sería de 5% en esta gestión. El monto programado para 2004 fue de 26.662.942.243 millones de bolivianos, el cual fue aumentado en 12% respecto al presupuesto del 2003. Si hubo un incremento previo, ¿cómo puede sostener el gobierno que existe una reducción de 5% (35 millones de dólares)?

Estas medidas no sólo no encajan en el concepto de austeridad, sino que no afectan el corazón del déficit fiscal: el pago de la deuda pública (interna y externa) y las transferencias de pensiones y jubilaciones que tanto el FMI como el BM impulsaron hace algunos años. Si el gobierno tomara como política de negociación con estos gobiernos la suspensión temporal del pago del servicio la deuda externa, por ejemplo, llegaría a “ahorrar” cerca de 335 millones de dólares anuales.

En cuanto a los impuestos, el retroceso mostrado por este Gobierno ante las presiones de sectores empresariales de la agroindustria del Oriente boliviano, deja caer toda la cáscara progresista del discurso del Presidente. Ya no se cobrará el llamado “impuesto a la riqueza” y aquel impuesto a las transacciones financieras está en duda.

El empleo de emergencia y transitorio

Por el lado de la demanda de empleo, nada cambiará este año para superar el déficit de trabajo que alcanzó a 350 mil personas o el 13,5 de desempleo abierto el 2003 (Cedla). Para enfrentar estas cifras alarmantes, Carlos Mesa anunció la creación de “empleos de emergencia” que son básicamente eventuales, sin protección social, sin derechos y con bajísimos salarios.

El Estado ha optado por mantener la visión de que el mercado generará empleo, por lo que el gobierno se encargará únicamente de aplicar “políticas compensatorias para los más pobres”. Según estimaciones realizadas por el Cedla —a partir de las promesas del gobierno— se crearían apenas 300 puestos de trabajo al año para 32 mil instalaciones de gas domiciliario; 350 puestos para la transformación de 20 mil vehículos y 10 mil puestos para construcción de viviendas. A eso se sumarían los 30 mil puestos que ha generado el PLANE (Plan Nacional de Empleo de Emergencia) y que se reeditará en su tercera versión.

Además del escaso impacto de este tipo de empleo precario en los niveles de desocupación del país, el efecto nocivo de la medida es la “normalización” de esta oferta laboral tanto por parte de la empresa estatal como privada. Al trabajador/a no le queda otra opción que someterse a las condiciones impuestas por los empleadores que incurren en permanentes violaciones a los derechos laborales.

La propiedad y los impuestos a los hidrocarburos

Finalmente, es necesario recordar que el recurso natural del gas ha sido uno de los ejes centrales de movilización popular en octubre pasado. El planteamiento de la gente, en las calles, se expresó en las consignas “gas para los bolivianos” y “el gas no se vende”.

A más de cinco meses de gobierno, Carlos Mesa aún no ha dado una respuesta concreta al respecto. Si

Alicuotas efectivas del Impuesto Complementario a los Hidrocarburos

GAS NATURAL			PETRÓLEO		
Volumen MMBtu/mes	Alicuota nominal %	Alicuota efectiva %	Volumen Barriles/mes	Alicuota nominal %	Alicuota efectiva %
1.084.650	5,00	5,00	30.000	7,50	7,50
4.075.185	7,70	6,98	87.000	10,00	9,14
7.065.720	10,40	8,43	144.000	12,40	10,41
10.056.255	13,10	9,82	201.000	14,90	11,68
13.046.790	15,80	11,19	258.000	17,30	12,91
16.037.325	18,50	12,55	315.000	19,80	14,16
19.027.860	21,20	13,91	372.000	22,20	15,38
22.018.395	23,90	15,27	429.000	24,70	16,62
25.008.930	26,60	16,62	486.000	27,10	17,84
27.999.465	29,30	17,98	543.000	29,60	19,08
30.990.000	32,00	19,33	600.000	32,00	20,30

Fuente: Elaboración propia con base en Proyecto de Ley de Hidrocarburos, 9ª versión.

bien se abrogó el cuestionado DS 24806 de 4 de agosto de 1997 que aprobaba el Modelo de Contrato de Riesgo Compartido, sigue vigente el artículo 24 de la Ley 1689 de 30 de abril de 1996, que señala: "Quienes celebren contratos de riesgo compartido con YPFB para explotación, explotación y comercialización de hidrocarburos adquieren el derecho de prospectar, explotar, extraer, transportar y comercializar la producción obtenida (...)".

Esto significa que, en ambos casos se establece en favor de los contratistas el derecho de disponer de la producción obtenida, otorgándole al Estado únicamente el pago de las regalías establecidas por

cada tipo de hidrocarburos. Ello quiere decir que mientras esté vigente la Ley 1689, las empresas petroleras podrán disponer de la producción, con la única restricción de asegurar la provisión del mercado interno de gas natural y de los contratos de exportación a la Argentina y al Brasil.

En otras palabras, las empresas que controlan hoy en día la totalidad de los pozos de gas natural, podrán seguir bajo el régimen legal anterior, al menos por 40 años, con la sola condición de someterse al nuevo impuesto creado, el Impuesto Complementario a los Hidrocarburos (ICH) y de comercializar prioritariamente en el mercado interno

los volúmenes requeridos para satisfacer el consumo de petróleo, gas natural y GLP.

Por otra parte, hay que aclarar que el Impuesto Complementario de Hidrocarburos (ICH) presenta una ecuación que no cuadra, al menos con la promesa de elevar las regalías petroleras. Supuestamente, la alícuota del ICH sería del 32%, la que sumada a las regalías del 18%, llegaría a 50% a favor del Estado.

El ICH, que gravará la comercialización de los hidrocarburos (petróleo destinado al mercado interno o a la exportación, gas natural para exportación y el GLP para el consumo interno o para la exportación), tendría una alícuota o tasa variable, de acuerdo al volumen de las ventas brutas de los hidrocarburos, elevándose desde un mínimo de 5% para el gas natural y un 7,5% para el petróleo, hasta un 32% como máxima tasa para ambos productos.

Sin embargo, dada la forma de aplicar el impuesto a los volúmenes de hidrocarburos comercializados -aplicación sobre excedentes de acuerdo a una tabla específica-, la tasa efectiva no pasaría, en el mejor de los casos del 19,3% para el gas y del 20,3% para el petróleo. Por lo tanto, se verifica la primera mentira: el impuesto no llega al 32 del valor de los hidrocarburos explotados ■

* Este artículo fue elaborado en base al Documento de Coyuntura N° 6 "Un respiro político hasta el 2007? Realidades y apariencias del Plan Mesa", CEDLA, marzo de 2004.

PROGRAMAS TELEVISIVOS
SPOTS PUBLICITARIOS
DOCUMENTALES

Colle Betisario Salinas N° 345
Tels: (+591-2) 2441113/2441115
Fax: (+591-2) 2441128
imagen_virtual@latinmail.com
La Paz • Bolivia

imagen
VIRTUAL

Magazine Informativo
POSDATA
POSDATA

DE LUNES A VIERNES A LAS 23:00
POR CANAL 7 TELEVISIÓN NACIONAL

Saber extraerla.
Saber brindarla.
Saber preservarla.

Porque estamos comprometidos en trabajar por un mundo mejor

SAGUAPAC
El agua de todos

Arzabe & Jure